

# **Cleptocracia y empresariado en el Perú**

*Bajo Fujimori, el Perú sufrió de una corrupción extrema con participación empresarial, caso ignorado por los enfoques convencionales, que se centran en los funcionarios públicos y la debilidad del Estado. La responsabilidad del empresariado es doble: sostuvo al régimen y hubo participación directa en casos de renta y corrupción. Hacia 2000, la difusión de videos de la corrupción llevó a una ruptura entre Fujimori y Montesinos. Los videos facilitaron la investigación del delito económico-empresarial gracias a tres factores: el impulso reformador que produjo la indignación moral, el fortalecimiento del Congreso, y la formación de juzgados anticorrupción. No tanto gracias al Ejecutivo, pues Toledo fue «capturado» por los intereses económicos.*

**Francisco Durand**

**E**n medio del escándalo protagonizado en 2000 por la ruptura entre el presidente Alberto Fujimori y su asesor Vladimiro Montesinos (a raíz de un video donde se veía a Montesinos pagando 15.000 dólares a un congresista de oposición para que cambiara de bando), el consiguiente exilio del asesor, su

---

**Francisco Durand:** sociólogo peruano; Ph.D. de la Universidad de California, Berkeley; profesor de Ciencia Política de la Universidad de Texas; autor de numerosos libros y artículos sobre la relación entre empresarios y Estado y el desarrollo institucional de administraciones tributarias.

**Palabras clave:** corrupción, empresariado, clase política, política anticorrupción, Fujimori, Perú.

---

***Varios de los grandes empresarios peruanos mantuvieron estrechas relaciones con la «mafia fujimontesinista»***

regreso repentino de Panamá, su fuga en yate hacia Venezuela, y la sorprendente renuncia por fax del presidente desde Tokio, perdimos de vista la necesidad de hacer una mejor disección de la corrupción. El análisis que sigue ilumina la responsabilidad empresarial y su conexión con la renta, lo que permite entender mejor la caída del fujimorismo y el contraciclo moral que le sigue.

Bien visto el problema, resalta el hecho de que varios de los grandes empresarios peruanos mantuvieron estrechas relaciones con la «mafia fujimontesinista». Montesinos viajó a Panamá en un avión privado con autorización de Dionisio Romero, el banquero e industrial más poderoso del país, dueño de la empresa aérea, y a pedido del empresario y político Carlos Boloña, ministro de Economía, quien había trabajado para Romero y preparaba un golpe de Estado con Montesinos. Más tarde el escurridizo asesor se fugó en un velero propiedad de otro empresario. Pero la conexión es mucho más temprana y profunda. En efecto, una fracción de empresarios se enlazó con el círculo mafioso del poder, mientras que la mayoría de los gremios y líderes fueron un sostén clave de Fujimori hasta el final.

Revisemos distintos enfoques antes de proponer uno alternativo sobre la corrupción que incorpore lo empresarial. A pesar de sus diferencias, dos teorías consideran la *debilidad del Estado* como uno de los principales problemas. Ciertamente, un Estado institucionalmente precario facilita la colusión que permite aprovecharse de los bienes públicos y la venta de influencias. Organismos como Transparency International, el Foro Global de Lucha Contra la Corrupción, y los analistas que defienden el *statu quo* neoliberal, sostienen que la corrupción es básicamente «el abuso de un cargo público para beneficio privado»<sup>1</sup>. Por necesidades sistémicas de reforzar la globalización, se debe «reformar el Estado» para evitar el desperdicio de recursos, facilitar la inversión y fortalecer el rol del mercado<sup>2</sup>. Otra versión, más sociológica y por tanto general, se concentra en *las redes familiares y amicales* que operan «amoralmente», práctica social asociada a la herencia colonial, la pobreza y el bajo nivel de identidad nacional. Ambas teorías, una centrada en el Estado, otra en la sociedad, aportan a la

1. Daniel Kauffman: «Economic Corruption: Some Facts», ponencia presentada a la VIII Conferencia Internacional Anticorrupción, Lima, octubre de 2002. V. tb., «Corruption: The Facts» en *Foreign Policy* N° 107, pp. 114-132.

2. Kimberly Ann Elliot: *Corruption and the Global Economy*, Institute for International Economics, Washington, D.C., 1997.

comprensión del problema sobre el rol clave de los funcionarios y las redes sociales, pero subestiman la articulación entre los intereses empresariales y el poder político para medrar o delinquir económicamente, y los grados de concentración del poder que facilitan la corrupción y que se asocian a un Estado institucionalmente débil.

Los estudios de los «crímenes de cuello blanco», que andan mejor encaminados y son importantes a pesar de limitarse a casos en Estados Unidos<sup>3</sup>, enseñan que estos delitos son más difíciles de detectar y comprobar, rara vez se sancionan, no se les penaliza con severidad, y peor todavía, no conllevan el estigma social de ser un delito. En América Latina, precisamente por la gran debilidad del Estado, estos delitos económicos son más graves, al ser mayores las sumas involucradas en relación con el nivel de riqueza que se genera y, además, porque existe un grado extremo de impunidad con «los de arriba».

Los estudiosos de los buscadores de renta, aspecto asociado al mal gobierno, también hacen aportes y muestran algunas limitaciones. No hay duda de que el rentismo esclarece parte del problema, pero se limita a las rentas legales, cuando éstas en realidad se yuxtaponen a la corrupción. Llama asimismo la atención que estos estudios se centren principalmente en empresas nacionales, como si el mercantilismo fuera cosa del Tercer Mundo. Para corregir esta distorsión, el periodista Andrés Oppenheimer publicó el libro *Ojos vendados* (2001), sosteniendo que la corrupción no tiene nacionalidad, involucra a las multinacionales aunque prospere más en ciertos países.

Para empezar aclaremos qué hay de nuevo con Fujimori en materia de empresarios y corrupción, un tema tan viejo en el Perú como los préstamos a los virreyes y las exportaciones de guano de mediados del siglo anterior, cuando todo olía mal. El caso revela nuevas facetas en relación con su pasado y el continente. Primero, porque el Perú sufrió como pocos varias crisis sucesivas y profundas (1978, 1984, 1988-1991) que casi hicieron colapsar el Estado, generalizándose la corrupción en todos los ámbitos, incluyendo la sociedad civil y la prensa.

Segundo, porque en medio de la crisis, reactivamente, se formó un gobierno semiautoritario sin precedentes en 1990. El fujimorismo llegó de improviso al poder para generar «orden y progreso» eliminando la inflación, las formas de renta populista y la violencia política. Con ello se restauró el orden elitista y se generó apoyo popular al *hombre fuerte*. Mientras ocurrían estos cambios, se fue-

---

3. V. Russell Mokhiber: *Corporate Crime and Violence*, Sierra Club Books, San Francisco, 1988.

ron concentrando silenciosamente poderes no solo en el Ejecutivo, que controló el Congreso y el Poder Judicial, sino dentro del propio aparato de Estado. Este aspecto ha sido ignorado por los «fujimorólogos», que se limitaron a condenar la naturaleza autoritaria del régimen. En realidad, se formó un *triángulo del poder* en torno de la presidencia (Fujimori), el servicio de inteligencia y el

***En las prácticas  
rentistas  
y corruptas  
del triángulo  
del poder  
están involucrados  
empresarios  
que mantuvieron  
una relación íntima  
con los gobernantes***

aparato represivo policial militar (Montesinos) y el ministro de Economía (Jorge Camet principalmente). Fue allí donde anidó prontamente la corrupción y se generaron enormes rentas, y desde donde se debilitó aún más la calidad institucional del Estado.

Tercero, este triángulo del poder fue apoyado por los militares, los empresarios, los poderes fácticos externos, y el Opus Dei. Gracias a este soporte, y luego de consolidarse con el golpe presidencial de 1992 y la reelección de 1995, la nueva clase política buscó permanecer. La concentración

decisoria en medio de un orden autoritario, y la larga duración, permitieron desarrollar operaciones de corrupción en el más alto nivel, hasta ocurrir un salto cualitativo y conformarse un *gobierno cleptocrático* pero con apariencia de reformador y de legitimidad. La corrupción empezó desde arriba, en forma secreta, y corrompió prácticamente casi todos los aparatos del Estado, la prensa y parte de la sociedad civil, neutralizando los mecanismos de control interno, y liquidando el equilibrio entre poderes y el pluralismo que pudo haberla contenido. Se trata de una corrupción más concentrada y secreta, que desde lo más alto del Estado contamina hacia abajo el resto de la burocracia y la sociedad civil.

Cuarto, la mafia montesinista recurrió al chantaje mediático para buscar ser hegemónica, lo que generó nuevos tipos de conflicto. Montesinos documentó visualmente las coimas y compras de influencia<sup>4</sup>. Este elemento llevó luego al régimen a su ruina cuando Montesinos, como su antecesor Manuel Antonio Noriega en Panamá, comenzó a jugar con Dios y con el diablo, hasta que «alguien» muy poderoso filtró un video a la prensa. A su vez, los 4.000 videos de Montesinos permitieron generar una ola anticorrupción sin precedentes: ilustraron de modo incuestionable lo profundo que había penetrado la corrupción e iniciaron un raro *contraciclo moral* en la sociedad civil y en el Estado. Ello abrió

4. V. *En la sala de la corrupción. Videos y audios de Vladimiro Montesinos (1998-2000)*, Fondo Editorial de El Congreso del Perú, Lima, 2004.

una oportunidad histórica de investigar y procesar a los corruptos, incluyendo a los responsables del delito económico, lo que no había ocurrido antes.

El análisis de la corrupción fujimontesinista no indica que el empresariado como clase estuviera colectivamente envuelto en la corrupción, pero hay una *responsabilidad general* por haber sostenido el régimen desde el golpe de 1992 hasta el final, y una *responsabilidad parcial* de un círculo de importantes líderes y grandes empresas envueltas en rentas y casos de corrupción. Las grandes operaciones de delito económico fueron restringidas, y envolvían solo a una parte del empresariado, pero incluyeron a grandes corporaciones y a importantes jefes de las grandes familias y gerentes de multinacionales. El problema no es, entonces, marginal o secundario. Esa fracción empresarial abiertamente corrupta, o participante en acciones cuestionables ética y fiscalmente, junto a gran parte del sector privado, fue el soporte central del régimen desde el lado de la sociedad civil y fue el nexo con los gremios y el empresariado en general.



El círculo rentista y corrupto, más los principales gremios y líderes empresariales, influyeron en la opinión pública, financiaron la permanencia de Fujimori en el poder en 1995 y en 2000, y quisieron convencer a los poderes fácticos externos de las bondades de la continuidad. En plena crisis del régimen mediaron incluso con el gobierno estadounidense para que apoyara a Fujimori en su tercer periodo, argumentando, como dijera el minero Roque Benavides, presidente de Confiep (Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas), el gremio cúpula, que podía «democratizarse».

En la *dinámica yuxtapuesta* de grandes rentas y corrupción, que tienen en común ser ambas éticamente condenables, actuaron, de un lado, los *políticos empresarios*, gente dispuesta a acumular ganancias como funcionarios públicos, caso clásico de corrupción. De otro lado, los *empresarios políticos*, aquellos que se introdujeron en el Estado para armar redes de influencia con el fin de medrar de rentas, comprar influencias, socializar las pérdidas del sector privado y aprovechar la privatización de empresas estatales. Estos empresarios políticos han sido objeto de investigación no solo porque aparecieron en los «vladivideos» arreglando juicios, o recibiendo coimas millonarias, sino por un sinnúmero de casos de colusión y corrupción.

Estos casos son revelados a medida que en el gobierno transicional de Valentín Paniagua (noviembre 2000-julio 2001) ocurren tres cambios: se fortalece el Congreso, que decide difundir al país los vladivideos, se forman los novedosos juzgados anticorrupción, y se fortalece al procurador. Sin estos cambios, la lucha contra la corrupción, particularmente la empresarial, habría fracasado, pues a los intereses económicos les habría bastado con neutralizar el Ejecutivo. El proceso de investigación continúa durante el periodo de Alejandro Toledo gracias al Congreso y a los jueces anticorrupción, pues muchos empresarios procesados financiaron la campaña y ejercieron importante influencia en la presidencia y el Ejecutivo. Esta quiebra de la concentración del poder jugó un rol central en el contraciclo. De las muchas comisiones investigadoras formadas por el Congreso, la presidida por Javier Diez Canseco, que se especializó en analizar los delitos económicos en 2001-2002, y la denominada Comisión Herrera, que remató las investigaciones en 2003-2004 con un informe final, fueron las que mayores avances lograron. Sus informes, abiertos al público, son altamente reveladores<sup>5</sup>.

En las prácticas rentistas y corruptas del triángulo del poder están involucrados empresarios que mantuvieron una relación íntima con los gobernantes. Empecemos con la presidencia. Se conoce que Fujimori tuvo un rol activo, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en la negociación de concesiones y garantías para firmar discrecional y secretamente más de 600 contratos de estabilidad tributaria. De esta forma «se ganó» a los grandes empresarios. También participó en decisiones vinculadas a la recompra de papeles de la deuda externa, y la compra de armamentos, dos operaciones millonarias que han dado lugar a numerosos juicios. En cuanto a coimas propiamente dichas (aparte de las recogidas de empresas chinas por uno de sus hombres

---

5. Los informes han sido publicados y pueden verse también en el portal del Congreso.

de confianza y ministro, Víctor Joy Way), y de las «cajas negras» que manejó la presidencia, cuyo origen se desconoce, sabemos de dos casos revelados por la prensa. Uno, los 10 millones de dólares que Tractebel pagó al presidente por el proyecto Gas de Camisea. Dos, la coima de varios millones de dólares del banco español Bilbao-Vizcaya (BBVA) por la privatización del Banco Continental. Además, las comisiones del Congreso han encontrado claras inconsistencias entre los modestos ingresos oficiales del mandatario y sus cuantiosos gastos. Por último, en 1997 el Grupo Gloria le compró una propiedad inmueble por 700.000 dólares. Es probable que estuviera sobrevalorada; no se conoce que antes de ser presidente el negocio de la construcción de Alberto y Susana Fujimori fuese tan rentable.

***El arreglo  
de juicios  
–operaciones  
bastante  
documentadas  
visualmente–  
fue una de  
las especialidades  
de Montesinos***

En cuanto a Montesinos, aparte de sus numerosos negocios personales y sus vínculos con el narcotráfico, destaca su íntima relación con el Banco Wiese, considerado como «el banco de la mafia», con el que tenía una relación especial documentada en audios y videos. Coincidentemente, este banco fue rescatado de manera generosa por el Estado en 1999 a un costo de 700 millones de dólares. Luego, para seguir defendiéndose, Montesinos estableció una relación estrecha con Elianne Karp, la primera dama de Toledo (que trabajó como consultora del banco) y con el propio presidente, quien intercedió a su favor. Obviamente, la millonaria compra de armas luego del conflicto con el Ecuador de 1995 ha sido una de las grandes operaciones cleptocráticas que involucra a numerosas empresas. Gran parte de los recursos de la privatización se esfumaron en esas operaciones. Estos negocios de armas, sin embargo, siempre han sido turbios, así que poco añaden como aclaración.

El pago en efectivo a dueños de medios (además del gasto preferencial en publicidad y el concederles impunidad tributaria) constituye una dimensión clave de la participación del sector privado en la corrupción. Montesinos se concentró en comprar principalmente casi todos los canales de televisión (Ernesto Schultz, de Canal 5, recibió un millón de dólares en efectivo), varios periódicos y revistas (*Expreso* y *Sí*), y toda la prensa tabloide, que se convirtió en su principal arma de ataque. Numerosos dueños de medios de comunicación están presos o fugados, entre ellos Schultz y José Enrique y José Francisco Crousillat (Canal 4). Los empresarios de la comunicación, que entraron en declive en las crisis anteriores, resultaron muy fácilmente parte del entorno mafioso y constituyeron *la parte más corrupta del empresariado establecido*.

Otro caso es el de la Caja de Pensiones Militar-Policial y el Banco de Comercio, ligado a la Caja, que se convirtieron en «sus bancos». Desde allí se realizaron extrañas compras de hoteles y propiedades, se hicieron préstamos favorecedores a compañías, y se crearon empresas *off shore* para trasladar ganancias ilícitas o desfalcar instituciones. De esos fondos se aprovecharon varios importantes empresarios, como Juan Carlos Hurtado, ex-ministro de Economía, hoy fugado, quien recibió un «préstamo» de 13,5 millones de dólares, y la constructora Sagitario, del Grupo Wiese. Como dijera uno de los testaferros de Montesinos poco después de su detención, «todos los propietarios se llevaban la impresión de que tenían que cumplir con la comisión (coima)».

Finalmente, el arreglo de juicios –operaciones bastante documentadas visualmente– fue una de las especialidades de Montesinos. En ella participaron el banquero Romero (para arreglar el caso de una empresa en juicio que le debía al banco, a cambio de declaraciones a favor de la reelección de Fujimori en 1999), la empresa de oro Yanacocha (en su lío de accionistas, donde ganaron Newmont Mining y el grupo Benavides de la Quintana), y la empresa Luchetti (del grupo chileno Luksic, que le pidió a Montesinos una «guerra corta y sangrienta» contra el alcalde de Lima, quien cuestionó la instalación de la planta en una zona ecológica).

Otro caso menos conocido fue el manejo de varias salas del Tribunal Fiscal. Una de ellas fue dirigida por Juan Guillén, contador de Montesinos; lo más probable es que fuera para favorecer a empresas previo pago de coimas (o para extorsionarlas). Lamentablemente, estos casos se han investigado poco. Se conoce que Montesinos penetró la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), y logró que ésta creara una lista de empresas y personas excluidas de auditoría (incluyendo la de sus testaferros y las empresas del ministro Camet), lo que luego llevó a una acusación contra el superintendente y ex-ministro de Economía Jorge Baca. Cabe anotar que antes de llegar a la Sunat, y gracias a gestiones de Camet, Baca fue gerente del Instituto Peruano de Economía (IPE, sobre el cual hablaremos luego). Junto a ese escudo tributario, Montesinos también utilizó a la Sunat para plantar denuncias hechas en colusión con empresas deseosas de debilitar o eliminar a la competencia. Incluso llegó a tener acceso a la base de datos de impuestos gracias a una oficina de inteligencia que funcionaba en la propia Sunat.

El MEF, por su parte, fue ocupado por empresarios políticos como parte del pacto con Fujimori en 1990. Con excepción de uno, todos los ministros están procesados, algunos fugados, otros encarcelados. La mayoría participó en la insólita práctica de aprobar 104 «decretos secretos». Ese invento cleptocrático,



usado principalmente para la compra de armas, blanqueó legalmente la corrupción secreta de alto nivel.

La recompra de papeles de la deuda externa constituye la operación económicamente más importante. Es muy probable que haya existido corrupción, y con bastante seguridad rentas fabulosas. La manejó discrecionalmente Camet, hoy encarcelado por otros juicios, quien estuvo más de cinco años al mando de ese poderoso ministerio. El MEF terminó controlando verticalmente varias superintendencias (tributaria, aduanera, banca y seguros). La compra secreta e innecesariamente prolongada de bonos de la deuda externa fue hecha cuando el MEF había formado redes de influencia con el sector privado vía *puertas revolving* entre asesores legales y economistas que a su vez trabajaban para empresas y organismos privados. El principal asesor legal del ministro en materia de deuda, el abogado Francisco Moreyra, asesoraba al mismo tiempo a dos empresas compradoras de bonos. Además participaba como director en el IPE, el organismo de economistas neoliberales que asesora al MEF en cuestiones comerciales y tributarias. Grandes empresas como Telefónica, Banco Wiese, Banco de Crédito, además de varios presidentes de la Confiep, formaron parte del IPE. Según las comisiones del Congreso, quienes compraron la mayor parte de los bonos se beneficiaron tanto con una repentina valorización (pasando del 23% al 67% en 18 meses), como porque luego pudieron usarlos para comprar empresas estatales.

Otra operación cuestionable fue la conversión de la deuda rusa de rublos a dólares, lo que generó una pérdida considerable al Estado y provocó la renuncia de Camet en 1998. Además, el MEF de Camet fue responsable por concentrar el poder decisorio en licitaciones de obras públicas, gastando 550 millones de nuevos soles entre 1990 y 2001. Lo curioso es que participaba JJC-CG, la propia empresa del ministro, y también Graña y Montero, donde Roberto Abusada, fundador del IPE y principal asesor del MEF, era parte del directorio. En ambos casos existía conflicto de intereses. Junto a esas dos empresas, otras cinco constituyeron un grupo privilegiado conocido como «las siete hermanas», que ganó el 66% de las adjudicaciones.

Junto a los contratos de estabilidad tributaria, las exoneraciones tributarias se convirtieron en la principal fuente de renta del periodo neoliberal. Decenas de normas emitidas por el MEF, algunas superpuestas o contradictorias, permitie-

***Junto a los contratos de estabilidad tributaria, las exoneraciones tributarias se convirtieron en la principal fuente de renta del periodo neoliberal***

***La bisagra que une  
al empresariado  
establecido  
y organizado  
y los beneficiarios  
de la corrupción,  
es la renta***

ron generar una *legislación sastrer*, hecha a la medida para beneficiar a determinadas empresas y sectores. La perla es el decreto supremo 120-94-EF que permitía la doble depreciación de activos si las empresas se fusionaban, lo que generó una extraña ola de cientos de fusiones, algunas reales otras ficticias, que desangraron fiscalmente el Estado. Era una norma temporal que luego se extendió año a año hasta 1998, a medida que más empresas querían gozar del insólito descuento. El conjunto de exoneraciones llegó a un grado de abuso que incluso el Fondo Monetario Internacional, que siempre apoyó al Gobierno, llamó la atención, indicando que equivalía al 1,34% del PIB.

Bajo ese clima colusivo, varias multinacionales (las eléctricas Luz del Sur, Edelnor y Egenor, y la minera Barrick) interpretaron las normas de doble depreciación como si la exoneración temporal se pudiera incluir en los contratos de estabilidad tributaria. Dado el clima de colusión y corrupción imperante, resulta difícil que este favor fuera gratuito. De ese modo varias de esas multinacionales se autoexoneraron prácticamente del pago del impuesto a la renta desde su fundación, y hasta que venciera su contrato de estabilidad tributaria. El caso fue arbitrado bajo el gobierno de Toledo, y se le dio la razón a las empresas, que argumentaron que tenían «derechos adquiridos».

Como en otros países, las privatizaciones en el Perú, más allá de ser una forma de renta neoliberal, han dado lugar a cuestionamientos y ocasionales procesos judiciales al venderse subvaloradas o a un único postor (como el puerto de Matarani, concesionado al grupo Romero). Igualmente común ha sido el *rescate bancario* del Banco Wiese y el Banco Latino, que ha dado lugar a una probable pérdida de varios cientos de millones de dólares al Estado al absorber generosamente su cartera pesada, operación justificada para evitar el «pánico bancario». Los jefes de ambos grupos, Guillermo Wiese y Jorge Picasso, mantuvieron muy estrechas relaciones con el presidente Fujimori, el ministro Camet y el MEF. También participaron en el IPE.

En general, la banca fue un sector con el que el MEF mantuvo un trato privilegiado. Dos casos dan lugar a sospechas de que hubo colusión organizada y rentas y/o corrupción disfrazadas de «decisiones de política económica». El primero es una bolsa formada por los banqueros para hacer un pago extra a un grupo selecto de altos funcionarios, hecho revelado por el diario *Liberación*, lo cual habría garantizado acceso rápido y trato privilegiado. El segundo es indi-

cativo. Apenas sale Camet del MEF, luego del escándalo de la reconversión de la deuda rusa, pasa inmediatamente a formar parte del IPE y del directorio del Banco de Crédito.

Es sintomático que dos miembros del banco más poderoso del país estén hoy procesados: Dionisio Romero, su presidente ejecutivo, por tráfico de influencias, y el propio Camet, quien hoy pasa su arresto en una clínica privada, por los decretos secretos y la compra de armas. Debe añadirse que en el decenio fujimorista altos asesores del MEF fueron «cedidos» por el grupo Romero para dar «servicio al país». Uno de ellos, Daniel Saettone, pasó de ser gerente del Banco de Crédito a jefe del Gabinete de Asesores del MEF, para retornar luego al banco. Es el caso más interesante de *puerta revolvente* entre el sector público y el privado que borra sus fronteras.

La dinámica política de la corrupción, su mecánica, puesta en evidencia con la casuística arriba mencionada, indica, primero, que existió un apoyo general de gran parte del empresariado al régimen (los industriales opusieron cierta resistencia después de la apertura, algunos formaron parte de

la oposición), apoyo que se mantuvo hasta el final a pesar de las evidencias de abuso de poder, violación de derechos humanos, y extendida corrupción tanto del Estado como de la sociedad civil. Segundo, que en varios casos importantes, por el peso de las empresas y la talla de sus dirigentes, existió una participación directa de un círculo más reducido en la corrupción.

La bisagra que une a estos dos grupos, el empresariado establecido y organizado y los beneficiarios de la corrupción, es la renta. Se manifiesta principalmen-



te en el privilegio que tuvieron las grandes empresas de gozar de contratos de estabilidad, privatizaciones amañadas, exoneraciones tributarias y rescates bancarios. Todo ello creó un «buen clima para los negocios», políticamente malo, que garantizó el apoyo más general de los empresarios al régimen, a los empresarios políticos que se alojaron en el MEF, y a los políticos empresarios que manejaron la presidencia y el aparato represivo. Como me dijera el industrial Eduardo Farah en una entrevista en 1999, el gobierno de Fujimori fue históricamente «el más cercano a los empresarios» y sentía que debían apoyarlo. Farah definía certeramente a Camet como «un empresario político casi ideal, es decir un ministro empresario estable». Añadía que había un solo problema, «se dedica solamente a sus empresas»<sup>6</sup>.

La renta incorporó a ambos grupos a la lógica de apoyo al poder, lo que se revela en que muchos gremios y grandes empresarios jugaron a la continuidad en 2000 y mantuvieron firme su apoyo a Fujimori. Sin embargo, en los meses finales del régimen, un sector minoritario se fue desprendiendo poco a poco de Montesinos y tenían dudas sobre Fujimori. Creían en la posibilidad de que el régimen perdiera las elecciones o colapsara, que sobreviviera aislado o, peor aún, que fuera dirigido por Montesinos. El hecho de que Fujimori quisiera ir a la reelección «a cualquier costo» preocupaba fiscalmente. Todo ello podía afectar los negocios, pero había algo más. En las condiciones económicas de 2000 no se podía hacer empresa fuera de los marcos de la globalización. Los empresarios entendieron que, como mínimo, el Perú debía tener una semidemocracia o una seudodemocracia. Si en 1990 Fujimori era «la única alternativa» para ellos, en 2000 se había convertido en el «menor de los males». Aquí se encontraban líderes que estuvieron cerca del poder y se desencantaron, un grupo pequeño de empresarios que sufrieron de extorsión y persecución, y los que cuestionaban la viabilidad del fujimorismo.

Sin embargo, un factor clave para entender la crisis del fujimorismo y el rol de las elites es que a partir de 1999 existió preocupación en relación con los políticos empresarios como Montesinos. El poder del ahora temido asesor llegó a tal punto que se perdió el equilibrio y la coordinación en el triángulo del poder, pues su ambición y su influencia crecieron exponencialmente. Reclamaba *hegemonía* y había logrado, con la colaboración de Boloña en el MEF, y los temores de Fujimori en la presidencia, crear un solo gran centro decisional y ser el presidente virtual. Manejaba el Congreso, el Poder Judicial, el servicio de inteligen-

---

6. Sobre estas y otras entrevistas relacionadas con el tema, además de una interpretación del periodo de Fujimori como gobierno cleptocrático, v., del autor: *Riqueza económica y pobreza política*, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2003.

cia, la policía, los militares, los bomberos (para fraguar incendios) y gran parte de la prensa. Ante el hecho real de que Montesinos se había convertido en el Noriega peruano, se desequilibró la correlación de fuerzas con las elites. Como en Panamá, una cosa era aprovecharse de Montesinos y otra ser aprovechado por él. Para esa fecha, Fujimori ya había perdido apoyo popular y las masas comenzaban a movilizarse y sacudirse del medio represivo y los «operativos psicosociales» que tramaba Montesinos desde el servicio de inteligencia.

Ese desprendimiento empresarial comenzó a coordinarse con el Departamento de Estado y el Congreso de EEUU para buscar una alternativa. Como no tenían fuerzas internamente, recurrieron al exterior. Mientras en Washington algunos los apoyaban, otros vacilaban (la Agencia Central de Inteligencia, CIA, para la cual trabajaba Montesinos). Al final, un ente poderoso y secreto se animó a meter una cuña entre Fujimori y Montesinos para quedarse con el primero y apartarse del segundo. Como me dijera Julio Favre, vicepresidente de la Confiep, en una entrevista en julio de 2000: «creamos un monstruo y ahora se nos puede volver en contra». Más tarde refinaría ese diagnóstico cuando Fujimori empezaba su tercer periodo, al afirmar que: «Hace seis meses, Roque Benavides (presidente del organismo cúpula empresarial) era 100% fujimorista y lo mismo Bustamante de la Telefónica. Pero hace como tres meses ... comenzamos a hablar de redemocratización». Por ello, cuando surge el primer video en septiembre, y Fujimori rompe inmediatamente con Montesinos, los poderes fácticos cierran filas tras éste y lo ayudan a autoexiliarse en Panamá. La Confiep y el ministro Boloña, quien entonces se distancia de Montesinos, plantean apoyar el plan de Fujimori de continuar por un año más. Pero el descubrimiento de un almacén de videos incriminadores, y el intento de retorno de Montesinos, que comienza a usar sus armas de chantaje, malogran el plan de una transición ordenada y estalla finalmente la crisis con la fuga del presidente en noviembre.

Los empresarios, principalmente los procesados, incluso la propia Confiep, nunca han admitido su responsabilidad personal y política con el régimen, ni menos aceptado haber participado en actividades de renta y corrupción. Conviene analizar su mutua relación. Ambas prácticas están separadas y relacionadas (una es legal y la otra no), pero se refuerzan mutuamente. La corrupción facilita las rentas y las rentas facilitan la corrupción porque forjan un acuerdo de apoyo mutuo con los detentadores cleptocráticos del poder. La primera, la renta, es considerada legítima y necesaria, y las empresas beneficiarias están dispuestas a defenderla como «derecho adquirido». Bajo la administración Toledo, lo están haciendo con bastante efectividad, gracias en parte a que apoyaron financieramente su campaña, y por seguir el MEF ocupado por empresarios políticos.

El sector privado sostiene que eliminar las exoneraciones genera «ruido político» que «ahuyenta las inversiones». La segunda, la corrupción, es vista como casos que tienen poca importancia, que no han sido debidamente comprobados, o que constituyen una venganza política contra la elite económica del país. Sus juicios andan lento y no se esperan mayores sanciones, lo que es típico de delitos de cuello blanco.

La reflexión sobre estos hechos no solo sirve para llenar un vacío analítico y resaltar la conexión colusiva entre los intereses económicos y los políticos, lo que revela la dimensión esencialmente relacional de la corrupción que muchos ignoran. Culpar a los políticos, a militares y funcionarios, es la salida más fácil. También es probablemente una acusación interesada, pues deja de lado personajes empresariales que siguen actuando como actores legítimos en la política sin ser debidamente sancionados.

Esta transición de un régimen altamente corrupto y organizado a uno capaz de enjuiciarlo se explica en relación con los *grados y formas de concentración del poder político*. La corrupción y la renta fueron facilitadas por la doble concentración del poder en el Ejecutivo y en su interior, por la baja calidad moral en los más altos niveles y por la larga duración del régimen. Al colapsar, se crearon rápidamente, con el apoyo de la sociedad civil, mecanismos de equilibrio de poderes y vigilancia cívica que permitieron dar un salto cualitativo en otra dirección. Este esfuerzo moral puede dar resultados positivos a pesar de que, como con Fujimori, los intereses económicos han logrado la *captura del Estado*.

Este estudio introduce entonces una dosis de realismo, necesaria en tanto el neoliberalismo idealiza al empresario y considera que desarrollamos una «verdadera economía de mercado», que se aleja de la renta y la corrupción que la asociaron al populismo. La realidad peruana indica un escenario muy distinto. En suma, en el análisis de la corrupción hay que ver la concentración del poder, quién lo dirige, así como la forma específica que asume la debilidad institucional del Estado. También hay que considerar la zona gris que separa y une a la renta y la corrupción, y la cuestión del conflicto de intereses.

Como reflexión final cabe agradecer a Montesinos por una sola razón: haber renovado las bases documentales de la corrupción con una colección audiovisual que generó una ola de indignación nacional, lo cual ha abierto la posibilidad de que, por primera vez en la historia del país, exista un sistema político más equilibrado que pueda también investigar, acusar y castigar a «los de arriba».